

2

Degradación de las condiciones de vida en las ciudades latinoamericanas¹

EMILIO PRADILLA COBOS

La aguda crisis económica en la que se hallan sumidos los países latinoamericanos desde hace cuatro años, y las políticas de "austeridad", "ajuste" o "reordenación económica" puestas en práctica por sus gobiernos, bajo la vigilancia del Fondo Monetario Internacional, han dado lugar a un profundo proceso de pauperización absoluta o relativa de los sectores mayoritarios de la población campesina y urbana, y a una mayor degradación de las miserables condiciones de vida de los trabajadores en las ciudades. Así, el crecimiento urbano acelerado; el desempleo masivo; la penuria de vivienda, infraestructuras y servicios sociales; los déficit de transporte público; las variadas formas de subsistencia (venta ambulante, lavado y cuidado de coches, prostitución, mendicidad, robo, etc.) que se fueron gestando durante el periodo de expansión de las economías capitalistas de la región después de la Segunda Guerra Mundial, han sido elevadas a niveles dramáticos e insostenibles por la larga onda recesiva de la economía mundial y latinoamericana, iniciada a principios de la década de los setenta y, sobre todo, por la fase recesiva actual.

Analizar esta situación nos obliga a adentrarnos en la comprensión de las complejas relaciones que unen a los procesos económicos a escala regional y mundial, de las políticas anticrisis de los gobiernos latinoamericanos, de sus sectores empresariales y los organismos financieros internacionales, de los efectos de unos y otras sobre las condiciones de vida de las masas trabajadoras latinoamericanas y sus expresiones sobre las estructuras urbanas, así como a comprender las respuestas dadas por las mayorías al gigantesco proceso de expropiación de sus medios de subsistencia al que son sometidas para tratar de sacar a flote a los regímenes económicos y políticos dominantes en nuestro continente.

El proceso de concentración de la población latinoamericana en grandes centros urbanos ha continuado su curso inexorable determinado por los efec-

¹ Si en lo referente a la evolución de la economía de los países latinoamericanos se cuenta con la información estadística sistemática elaborada anualmente por organismos internacionales, en particular por la Comisión Económica para América Latina -CEPAL-, y con abundante información periodística muy actualizada, en el campo de la "problemática urbana" ocurre todo lo contrario: la información poblacional o de vivienda elaborada a partir de los censos decenales es muy antigua, no hay ninguna sobre infraestructura y servicios y la

tos del desarrollo capitalista sobre la distribución territorial de la población. En 1960, el 25.1% de la población habitaba en centros urbanos de más de 100 mil habitantes; en 1970, el porcentaje era del 32.8; en 1980 llegaba a 40.7% (Blitaer, 1983); en 1980 había en la región seis ciudades de más de cuatro millones de habitantes, ocho entre dos y tres millones y 13 entre uno y 1.9 millones (Banco Mundial, 1984). Al reducir la demanda de productos agrícolas destinados a las exportaciones y los precios de los exportados, al contraer el mercado de materias primas agrícolas para la estancada industria y reducir drásticamente el consumo de productos agrícolas destinados a los trabajadores debido a la caída vertical de sus ingresos, la crisis actual ha impactado doblemente a la población campesina: las inversiones capitalistas en el campo y las superficies sembradas se han reducido, por lo que se ha expulsado a obreros agrícolas o semiproletarios temporales; también se ha acentuado el proceso de pauperización del campesinado parcelario. Ambas tendencias conducen al incremento de los flujos migratorios del campo hacia las ciudades y, en el caso de México y Centroamérica —donde se suma a las causas meramente económicas, la violenta represión de los gobiernos dictatoriales enfrentados a guerras revolucionarias—, hacia los Estados Unidos, los cuales han respondido mediante el endurecimiento de las políticas migratorias y las razias contra los inmigrantes ilegales.

Los emigrantes campesinos se suman a la enorme masa de subempleados y a los obreros despedidos de las empresas como efecto de la crisis. Para esta gigantesca masa de población, privada de todo medio de subsistencia, la alternativa sigue siendo la misma de siempre: las actividades "marginales" o "informales", ideológicamente denominadas así por los técnicos y "científicos sociales" enrolados en los aparatos gubernamentales. Las ventas ambulantes que ya formaban parte del "paisaje urbano", se han multiplicado velozmente hasta convertir las calles de las grandes ciudades en enormes mercados al aire libre, donde se produce una redistribución de la pobreza entre los compradores, integrantes de las capas populares pauperizadas, y los vendedores, tan empobrecidos como sus clientes; resulta paradójico que estos productos genuinos de la vía de desarrollo capitalista latinoamericano y de su crisis, colaboran con los empresarios pues contrapesan, en parte, la caída de las ventas al multiplicar los puntos de intercambio mercantil llegando literalmente hasta su clientela en movimiento. Al mismo ritmo parecen multiplicarse el resto de las actividades de subsistencia: lavacoches, cuidacoches, enceradores de zapatos, cargadores, tragafuegos y pordioseros. El robo callejero de coches y de viviendas, bate récords históricos en nuestras ciudades. Desde la época previa a la revolución industrial en Europa no asistíamos a un proceso de lumpen proletarización tan gigantesco, sólo que éste ocurre después de varios siglos de desarrollo capitalista, de gigantesco avance de la técnica, de despliegue de la capacidad productiva, de dominio de la naturaleza y, paralelamente, de sus fuerzas destructivas ejemplificadas por el equilibrio del terror termonuclear y la militarización del espacio. A veces, el holocausto nu-

información coyuntural brilla por su ausencia. No disponemos de tiempo para llevar a cabo la dura tarea de reunir información nacional dispersa, elaborada con criterios diferentes, por lo que tenemos que limitarnos a interpretar conceptualmente los hechos conocidos o a hacer derivaciones lógicas a partir de los fenómenos económicos y políticos ya esbozados.

clear posible nos hace olvidar el genocidio que diariamente mata de hambre y de enfermedades perfectamente curables a millones de personas en África, Asia y América Latina, y nos hace olvidar también a los cientos de miles de niños condenados, por las deformaciones irreversibles generadas por la desnutrición, a una vida castrada y denigrante. Al imponer trabajos infrahumanos a porcentajes cada vez mayores de nuestra población y, en particular, a un número creciente de niños que tienen que olvidar la escuela para apoyar con su trabajo callejero la subsistencia propia y de su familia, nuestras sociedades violan diariamente los derechos humanos cuya carta firmaron sus gobiernos. Sus condiciones de "trabajo" son inhumanas: están expuestos al sol y al agua durante larguísimas jornadas de trabajo que ni el más retardatario código laboral aceptaría, se aventuran peligrosamente entre los autos en marcha, no tienen acceso a servicios sanitarios, ni tienen derecho a la seguridad social ni la organización sindical, luchan solos contra las leyes férreas de la economía burguesa, reprimidos por autoridades y policías para quienes es más importante que el "comercio establecido no tenga competencia", o que las calles "tengan un aspecto decente".

Uno de los sectores del proletariado latinoamericano más golpeado por la crisis y el desempleo masivo es el de los trabajadores de la construcción y las obras públicas. El impacto de la recesión sobre este sector de la producción ha sido más violento que en otros sectores y ramas, debido a la reducción de inversiones nuevas o a la reducción de ampliaciones en el sector industrial que demanda edificios y medios de producción; también debido a la paralización del crecimiento del comercio y de la banca que requieren de nuevos inmuebles, y a la austeridad en el gasto público que afecta a las grandes obras públicas, fundamental campo de acción de los grandes monopolios de la construcción. Si la burguesía del sector no se ha visto golpeada mortalmente se debe a que no se mantienen importantes masas de capital constante ya que los medios de producción se obtienen previamente a la iniciación de las obras y a que no se mantiene un número significativo de obreros permanentes; solamente se les contrata cuando una obra los requiere. Para los trabajadores, por el contrario, el impacto es salvaje. Tradicionalmente, el sector se compone de obreros de muy baja calificación; son contratados temporalmente para cada obra, a veces solamente durante un periodo muy corto para evitar el pago de prestaciones sociales; sobre ellos presiona permanente y masivamente el desempleo ya que no se necesita calificación alguna; su dispersión territorial, incluso para los contratados por una misma empresa, los priva de unidad y dificulta aún más la organización sindical defensiva; con frecuencia, su dispersión contractual es agudizada por la presencia de varias capas de subcontratistas que aparecen formalmente como sus patronos, aunque se hallen en condiciones laborales semejantes a las de sus contratados; en el sector domina aún esa forma primitiva y bastarda del trabajo a destajo. La masa de albañiles y ayudantes, gigantesca en épocas de auge, casi desaparece en las de crisis, engullida por el ejército industrial de reserva del que no se diferencian por su cualidad particular. Esto ha ocurrido en los últimos años en casi todos los países latinoamericanos, privando totalmente de ingreso a sus integrantes, entre ellos, a millones de niños y adolescentes. Paradójicamente, los constructores de las ciudades se encuentran entre las víctimas predilectas de la penuria de la vivienda y los servicios urbanos.

La penuria de vivienda ha acompañado estructuralmente el desarrollo urbano latinoamericano.² La crisis está agravando hasta límites insospechables este problema en el que se incluyen sectores de obreros calificados y empleados comerciales, bancarios y estatales, hasta ahora considerados como "capas medias" con acceso en el pasado a programas de vivienda de organismos estatales o a las "viviendas mínimas de interés social" producidas por la empresa privada de la construcción, o con posibilidades de acceso a viviendas más o menos adecuadas en alquiler. Ello ocurre por la combinación, desigual según los países, de los siguientes procesos:

1. Los precios del suelo urbanizable y construible tienden a subir a un ritmo similar al de la inflación galopante, al tiempo que una masa de capitales ociosos, no rinvertibles en la industria o el comercio, se dirigen hacia la propiedad inmobiliaria aprovechando el estancamiento coyuntural del mercado generado por la paralización de la actividad constructiva y la caída del mercado de suelo y vivienda, con ello se acentúa el tradicional monopolio de la tierra y se confía en que el futuro auge económico dinamice el mercado y permita recuperar, en forma acumulada, las rentas del suelo. La otra cara de la misma realidad la constituyen las políticas de limitación o la abierta represión a la ocupación de terrenos periféricos poco rentables y difícilmente construibles (pantanos, laderas, colinas, pedregales), de poco interés para sus propietarios privados o públicos, que constituyeron la "alternativa de solución" de la necesidad de vivienda para millones de ciudadanos pobres de nuestras ciudades. Parecen ya lejanos los días en los cuales los gobiernos locales permitían, y en ocasiones propiciaban, la ocupación de este tipo de terrenos y la autoconstrucción de viviendas, tal como ocurrió en ciudades como México, Lima, Bogotá, Guayaquil o Ciudad Guayana; su agotamiento y la aguda monopolización de las tierras urbanizables convertidas en "alcancía" de rentistas, son los determinantes de la nueva situación.

2. Por un lado el incremento de los precios del suelo, de los materiales de construcción a un ritmo a veces mayor que el de la inflación general —dado el alto grado de monopolización de este sector industrial en la región— y la elevación constante de las tasas de interés bancario e hipotecario, y por otro la caída de los ingresos reales del conjunto de la población trabajadora, han reducido aún más que en el pasado el acceso a la "vivienda adecuada" incluso para las "capas medias". Se llega al extremo, señalado por Martha Schteingart para el caso de México, de que la llamada "vivienda de interés social" sólo es accesible al 7.2% de la población de más altos ingresos, que reciben entre cinco y 20 veces el salario mínimo, en un país donde cerca de dos tercios de la población gana una vez el salario mínimo o menos (Schteingart, 1984). Esta situación se agudiza en países como Colombia, Brasil o Paraguay en donde se introdujo, desde hace más de una década, el sistema de "valor constante" o ajuste periódico del precio base de la vivienda, según índices iguales a la tasa de inflación, lo que acrecienta tanto el precio como el monto de los intereses.

² Son ya muy numerosos los trabajos de investigación sobre el problema de la vivienda en los países latinoamericanos realizados por Martha Schteingart, Oscar Nuñez, Priscilla Connolly, Mario Lungo, Samuel Jaramillo, Teolinda Bolívar, Alberto Lovera, Lucio Kowarick, Luis Alvarado, Alfredo Rodríguez, Gustavo Ríofrío, Diego Fernando Carrión, y muchos otros. Véase Pradilla Cobos, 1982.

3. La política de reducción del déficit fiscal mediante la elevación de los impuestos encuentra como sus renglones predilectos a los impuestos prediales, al producto de las rentas de la vivienda de alquiler y a los costos de escrituración de terrenos e inmuebles y de registro de contratos de arrendamiento. La vivienda en renta, independientemente de su vetustez, o de que ya sólo se cobre la renta del suelo por haber sido amortizada la inversión inicial, tiende a nivelar el monto de sus alquileres de acuerdo con los vigentes en las viviendas recién construidas, sobre los cuales se transfieren también los nuevos impuestos, esto, además, hace crecer el ritmo inflacionario. Puesto que el parque de vivienda en renta crece mucho más lentamente que la demanda, y que parte del existente se transforma en condominios o "propiedad horizontal", se crea una situación de escasez, de monopolio y fijación monopólica de los alquileres. El resultado es una generalización de formas "ilegales" de contratación del alquiler y un incremento de los desahucios o desalojos, legales o no, para poder así establecer nuevas tarifas de alquiler al margen de cualquier legislación que estableciera límites a ello.

4. Uno de los efectos del incremento del desempleo generado por la crisis, es la disminución del número de "derechohabientes" o cotizantes directos o indirectos de los organismos estatales como los denominados Fondos Sociales de Vivienda para los Trabajadores –cuya creación no se generalizó a pesar del apoyo y difusión dados por organismos como el Banco Mundial–, en los cuales se exige un trabajo regular (de base) y la acción directa del empresario para inscribir a sus trabajadores y cotizar por ellos. Igual reducción ocurre en organismos de vivienda estatales que aunque no tienen el sistema de cotización directa del asalariado (aparentemente, de su patrón), sí exigen como condición el ser "sujetos de crédito", lo que supone además de un monto mínimo de salario, una relación laboral estable con una empresa. Los programas de los organismos de vivienda estatal y sus "beneficiarios", además de verse limitados por el incremento del costo del suelo, los materiales de construcción, la maquinaria, los impuestos, la inflación y la elevación de las tasas de interés bancario, ven reducirse el monto de la inversión y el número de "soluciones" debido a la austeridad en el "gasto social" del Estado y a la desaparición casi absoluta del recurso al crédito externo, o bien por la búsqueda de rentabilidad o autofinanciamiento o la privatización de los organismos; en otras palabras, la aproximación del funcionamiento de estos organismos al de las empresas privadas de crédito hipotecario, parte integrante de las políticas de austeridad. Cabe señalar que es un error muy difundido el considerar que las bajas tasas de interés que se mantienen en los organismos estatales de vivienda constituyen un subsidio estatal, o una desvalorización del capital; no se trata de capital sino de rentas salariales entregadas por cada asalariado o por los empresarios bajo la forma de adelantos de capital variable hechos al Estado, para entregar a los asalariados como salario indirecto y/o diferido, las bajas tasas de interés son sólo una forma de solidaridad entre trabajadores que permiten que unos pocos reciban vivienda mediante la ayuda forzada de los demás asalariados cotizantes (Pradilla Cobos, 1985).

5. Más de la mitad de las viviendas de las ciudades latinoamericanas han sido producidas mediante la autoconstrucción. Esta forma de producir la vivienda, a la que se ven sometidos los trabajadores debido a su imposibilidad para acceder a otra forma cualquiera, eleva su costo social e individual a causa

de los arcaicos procesos de trabajo y de las rudimentarias herramientas manuales utilizadas, de la inexistente calificación de los constructores y de la dificultad para utilizar los materiales, con frecuencia de desecho, lo que da lugar a un valor mayor que el de las viviendas producidas en condiciones técnicas medias; esto a la vez es expresión y símbolo de la agudeza de la explotación capitalista sobre los trabajadores latinoamericanos pues muestra que su burguesía sólo concede como "vivienda socialmente necesaria" para el obrero y su familia, los hacinados, antihigiénicos e inestables tugurios o las estrechas y malolientes vecindades o inquilinatos en que habita la mayoría de la población urbana. La generalización objetiva obligada y la propaganda estatal de las virtudes de la autoconstrucción —campana apoyada abiertamente por los organismos internacionales del imperialismo— representan una ganancia neta para el capital local pues a la vez incrementan la plusvalía apropiada por la vía absoluta (alargamiento de la jornada de trabajo de los obreros para construir su vivienda, parte de su valor como fuerza de trabajo) y relativa (al generalizar la casa propia y autoconstruida, se descarga a los patronos del pago de esta parte del valor de la fuerza de trabajo y de su equivalente salarial): a pesar de estas ventajas netas, los gobiernos latinoamericanos, en la práctica, han concedido dentro de sus acciones una importancia absolutamente secundaria a la autoconstrucción y cómodamente prefieren que los trabajadores se las arreglen solos, sin tener que invertir fondos presupuestales (Pradilla Cobos, 1982).

En la coyuntura actual, la tradicional alternativa de la autoconstrucción tiende a cerrarse debido a la política estatal de impedir las ocupaciones de terrenos y los fraccionamientos irregulares —que permitían al autoconstructor evadir los altos precios de la tierra, el pago de instalación de servicios e infraestructura y los impuestos y costos de escrituración legal—; a la constante y acelerada elevación de los precios de materiales de construcción que, comprados al detalle y en el sitio cuestan al autoconstructor cerca del 20% más, y a la caída de los ingresos familiares debido al desempleo de más miembros de la familia y a la drástica disminución de los ingresos reales de los empleados. En cambio, las políticas estatales tienden a legalizar la tenencia de la tierra para integrarla al mercado capitalista y a la tributación; al mismo tiempo y como otra cara de la misma política, los pocos programas de autoconstrucción promovidos por el Estado se hacen cada vez más costosos por el cobro de altas rentas del suelo capitalizadas en el precio, por la introducción de infraestructuras, los crecientes costos de la titulación legal y la entrega de materiales industriales —para articular cada vez más esta forma al mercado capitalista del ramo—; se llega entonces a la paradoja de que dichos programas exigen un nivel de ingresos y una estabilidad laboral tal que los "beneficiarios" posibles ya no tienen ningún interés por ellos. Estamos entonces en una situación en la cual la única "solución" posible y real a la necesidad de vivienda es la reproducción de la vecindad o del inquilinato en los barrios populares periféricos ya consolidados, la cohabitación con familiares o el arriendo de los llamados "cuartos redondos" —hecho constatado en varias ciudades latinoamericanas como México y Santiago de Chile—, lo que provoca un incremento del hacinamiento, de la densidad y los déficit de servicios. Las ciudades latinoamericanas tienden entonces a convertirse en enormes vecindades o conventillos.

dores de vialidad, paralizadores del tráfico peatonal, antes de miles de muertes anuales, irracionales en el consumo de energéticos y en su uso cotidiano—; el meteórico encarecimiento de los automóviles, cuya producción está abiertamente monopolizada por las transnacionales estadounidenses, europeas y japonesas, frente a la disminución de los ingresos reales de las capas medias burocráticas, profesionales y pequeñoburguesas, está reduciendo sensiblemente sus ventas y, con ello, se estanca la expansión de su control sobre la estructura urbana; sin embargo, el congelamiento simultáneo de la ampliación o el simple mantenimiento de los medios públicos hace pírrica la ganancia para las masas laboriosas.

El desempleo masivo, la dureza de las formas de subsistencia, el deterioro de los niveles alimenticios, la disminución de los cuidados médicos y asistenciales, las largas jornadas de trabajo en pésimas condiciones de seguridad industrial, los larguísimos desplazamientos en medios de transporte público lentos y contaminantes, la ausencia de servicios en las colonias y barrios y la autocontaminación causada por ello, están destruyendo masivamente a la fuerza de trabajo urbana; sumada a la destrucción de la naturaleza, hacen de la ciudad capitalista semicolonial máquina de destrucción masiva de las dos fuerzas productivas fundamentales: la naturaleza y la fuerza de trabajo.

La crisis está agudizando, hasta niveles insostenibles y quizás irreparables, las contradicciones y los problemas urbanos que la acumulación salvaje de capital generó en las últimas seis décadas; y si una fuerza social transformadora, revolucionaria, no frena este proceso cambiando de arriba abajo la sociedad y la ciudad que la soporta y la expresa, el reinicio de la acumulación capitalista en las condiciones que las políticas de austeridad burguesa e imperialista le fijan, convertirá estas contracciones en estructurales, permanentes, y hará que las ciudades de nuestros países se acerquen a la barbarie, con el telón de fondo del lujo hiriente de sus beneficiarios, la burguesía nacional e imperialista.

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES CONTRA LA AUSTERIDAD Y LAS CARENCIAS URBANAS

La crisis, las políticas de austeridad y los efectos urbanos de una y otras, han generado importantes manifestaciones de protesta de la burguesía reformista que se expresa políticamente en las organizaciones y partidos liberales radicales, populistas, reformistas burgueses y socialdemocratizadores, en las organizaciones de izquierda en sus diferentes vertientes, desde el sindicalismo independiente y clasista, hasta los movimientos ecologistas, feministas y estudiantiles, de minorías étnicas, de organizaciones campesinas y de colonos e inquilinos pobres.

En Brasil, República Dominicana y Jamaica, las masas campesinas y urbanas, empobrecidas y hambrientas, se han lanzado en varias ocasiones a la calle, al saqueo de los comercios y, aun, al enfrentamiento abierto contra los aparatos represivos. En Bolivia, los heroicos obreros protagonistas de tantas batallas proletarias, han logrado imponer a su gobierno frentepopulista la moratoria del pago de la deuda externa y el levantamiento de las medidas más antipopulares de austeridad; los sindicatos ecuatorianos, brasileños y colom-

Uno de los componentes centrales de las políticas monetaristas anticrisis es la "rentabilidad", "autofinanciamiento" y eliminación de subsidios a los servicios prestados por el Estado; esto se revierte necesariamente en la elevación de los precios del transporte público, la energía eléctrica, el agua potable, la recolección de desechos, etc., que en el marco de la caída drástica de los ingresos y el desempleo, tiene como consecuencia inevitable la reducción de estos consumos esenciales a la reproducción de la fuerza de trabajo activa o en reserva y, consiguientemente, a la reducción de la calidad de su habitat. A ello se añade la reducción de la "inversión" pública en infraestructuras y servicios sociales (vialidad, transporte, salud, educación, recreación, etc.) y en la instalación de redes de servicios como el agua, los drenajes, la energía eléctrica, etc., con el objeto de disminuir el déficit fiscal, liberar fondos presupuestales para el pago de la deuda externa y reorientar fondos hacia inversiones en condiciones generales de la producción y el intercambio; de esta forma se apoya la recuperación empresarial o, simplemente se otorgan créditos subsidiados a los empresarios o se les reducen los costos de los mismos servicios, operando una transferencia de ingresos desde los consumidores familiares hacia las empresas. Algunos gobiernos tratan de encontrarles virtudes a estas políticas antipopulares, diciendo que "la vida cara en las grandes ciudades desestimulará las migraciones", e ignorando sus determinaciones estructurales o, al menos, tratando de cubrirlas detrás de una cortina de humo. Las justificaciones de una política de esta naturaleza tienden entonces a ubicarse en el plano de la "maldad" de los subsidios, y ocultan tanto el origen de los fondos invertidos en ellos —tributación social no sujeta a la necesidad de la ganancia ni de la rentabilidad— y su carácter como parte constitutiva del salario obrero entregado en forma indirecta o diferida.

Los gobiernos de las grandes ciudades latinoamericanas son parte de los grandes deudores de la banca trasnacional; durante la época del crédito fácil y barato, se endeudaron multimillonariamente para financiar obras públicas abiertamente orientadas a satisfacer las necesidades del gran capital industrial, comercial y financiero monopólico, o de los burgueses en sus zonas de residencia, para realizar obras suntuarias de ornamentación o costosos edificios —símbolo del poder estatal— destinados a albergar a sus cuerpos represivos. Hoy, cuando la situación ha cambiado de signo, se "socializa" su costo distribuyendo las cargas sobre los sectores mayoritarios de la población mediante el incremento de los impuestos o, lo que es peor, con la suspensión de las obras más necesarias a la vida cotidiana de las mayorías y se postergan *sine die* sus necesidades. Uno de los sectores más afectados es el de la protección de la naturaleza (recolección de desechos sólidos y líquidos, tratamiento y depósito de ellos, reforestación, control de emanaciones de gases industriales y automotores, etc.), precisamente en un momento en el que la burguesía en general, la industrial y la inmobiliaria en primer lugar, trata de mantener su tasa o su masa de ganancias mediante una depredación voraz y generalizada de la naturaleza, mientras que los sectores populares, ante la carencia absoluta de ingresos y de acciones estatales, contamina aceleradamente su habitat y, en ocasiones, otras áreas urbanas. La contaminación ambiental es hoy por hoy uno de los problemas más agudos de las grandes ciudades —la ciudad de México es el ejemplo más lamentable— y sus mortales efectos empiezan a verse sobre los ciudadanos más indefensos —los niños desnutridos, sin cuida-

dos médicos ni sanitarios— y las mayorías depauperadas. La respuesta oficial tiende a ubicarse en un plano esencialmente ideológico-demagógico que reemplaza las acciones reales con el discurso publicitario y oculta el papel fundamental que tiene la burguesía —nacional o extranjera— en la irracional destrucción de la naturaleza, una de las fuerzas productivas sociales fundamentales.

Es paradójico que los antitécnicos sistemas de depósito de basuras de nuestras grandes ciudades estén dando “empleo” a cada vez más importantes sectores de desempleados —los “pepenadores” o recolectores de basura— que, por unos cuantos pesos para subsistir, enriquecen a intermediarios, distribuidores, “padrinos” y policías, recolectando desechos reciclables o reutilizables.

La mujer carga sobre sus espaldas una parte fundamental de la crisis y las políticas para resolverla. Forzada por la depauperación extrema, se ha lanzado a las calles a realizar actividades de subsistencia, sin que por ello disminuya la carga de la cocina, el lavado y el cuidado de los hijos, o, en muchos casos, ejerce actividades absolutamente lesivas a su dignidad, como la prostitución, que son condenadas socialmente. Ante el desempleo masivo, la capacidad laboral de la mujer se compra a precios muy por debajo de los que se paga a los hombres por igual trabajo. El incremento de la delincuencia, la lumpenproletarización de la sociedad y las carencias urbanas tales como la iluminación y vigilancia (las policías, cada vez más corruptas se destinan fundamentalmente a la protección de las empresas y los empresarios, a la represión de la protesta social o abiertamente al saqueo de los ciudadanos), y las deficiencias crónicas del transporte público, convierten a la mujer en víctima cada vez más frecuente de las violaciones y el sadismo sexual, débilmente penalizado por una legislación hecha para reproducir la opresión del hombre sobre la mujer y su explotación económica.

Millones de jóvenes excluidos por un aparato escolar insuficiente y elitista, sin posibilidades de encontrar empleo, carentes de alternativas recreativas en sociedades en las que todo lo lúdico es mercancía de lujo, reprimidos sexualmente y perseguidos por los cuerpos policiacos, se refugian en el consumo de drogas —desde la marihuana y el ácido, hasta las inhalaciones de gasolina, disolventes y estimulantes (en cuyo tráfico se ha ido conformando una lumpenburguesía amafiada y poderosa en Perú, Bolivia, Colombia, México y las islas caribeñas)— o en el alcoholismo impulsado por grandes productores, comerciantes y publicistas transnacionales y locales y los gobiernos que en algunos países producen bebidas alcohólicas u obtienen parte sustancial de sus ingresos fiscales de la venta de estos productos. El barrio, la manzana, las vecindades, se convierten en territorio exclusivo y cerrado de las bandas o pandillas juveniles, del cual se expulsa a los demás y en el cual toda agresión al resto de la comunidad es posible; esta antidemocrática postura se contrapone en muchos casos a la lucha defensiva, democrática y reivindicativa que realizan los movimientos de colonos, pobladores e inquilinos de la ciudad, débil desarrollo de una conciencia política democrática, antiimperialista y anticapitalista.

La crisis sólo ha traído un efecto positivo involuntario: la reducción de la tasa de expansión de los vehículos privados —contaminantes del aire, entorpecedores del tránsito de los medios públicos de transporte, grandes consumi-

bianos, en grados diferentes, han lanzado huelgas y jornadas de protesta, bautizadas con su sangre. En Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, las masas han orientado su lucha contra los regímenes dictatoriales que durante más de una década les impusieron las más salvajes políticas de austeridad, logrando resultados democráticos innegables. En centroamérica, la hoguera de la revolución no se detiene en la lucha contra la austeridad burguesa, sino que plantea transformar más o menos radicalmente el sistema político y económico imperante. En otros países, aunque se mantiene la estabilidad relativa de lo político gracias al control burgués o estatal sobre la clase obrera y campesina, la tensión social está latente y amenaza estallar como un volcán, situación clara para los sectores más lúcidos de la burguesía y la tecnocracia que chocan contra la testarudez y la prepotencia de los gobiernos y el imperialismo reaganiano, convertido en el policía del mundo—incluido su espacio exterior— que considera a toda América Latina como su patio trasero y, por tanto, carente de derechos sobre su autodeterminación.

Las burguesías brasileña, uruguaya, argentina y boliviana, que durante años se beneficiaron con el crecimiento económico sustentado sobre la represión más brutal y la castración de las formas naturales de defensa de los explotados, han sentido el peligro y, con la lucidez e instinto que da la defensa de sus cuantiosos intereses económicos, han sabido encauzar el descontento popular y la lucha de los trabajadores hacia el campo político meramente democrático que permita fórmulas de recambio gubernamental para trasladar a la retaguardia a los militares (hasta una nueva ocasión en que las condiciones del enfrentamiento social exijan nuevamente su presencia); estas burguesías han llevado al poder, sobre las espaldas de los trabajadores y sus luchas, a grupos políticos radicales burgueses, reformistas, conservadores expropiados del poder en el pasado o, aun, a manifestaciones frentepopulistas; con ello lograron desactivar la bomba de tiempo por un periodo y desmovilizar a las masas; en esto el reformismo obrero tanto sindical como político ha jugado un papel importante. Sin embargo, la persistencia de la crisis y, por tanto, la necesidad de las políticas de austeridad pueden debilitar nuevamente a estos gobiernos y poner sobre el tapete, una vez más en América Latina, la cuestión del poder. La contradicción fundamental surge del hecho de la ausencia de una sólida y coherente dirección política de las masas obreras, campesinas y populares.

El movimiento de colonos e inquilinos pobres que se ha desarrollado en las grandes ciudades—a causa de las carencias y contradicciones urbanas—, que se ha fortalecido al aparecer como alternativa de lucha ante un control cerrado del sindicalismo clasista, y se ha ampliado y centralizado en países como México, Perú o Chile bajo la forma de coordinadoras o federaciones, está jugando un papel importante en este proceso, aunque en su seno se encuentran contradicciones internas y limitaciones, y esté bastante desligado orgánicamente del movimiento obrero y, aun, de las fuerzas políticas proletarias (Pradilla Cobos, 1981). A él se ha incorporado en forma significativa la mujer trabajadora, rompiendo en parte la opresión y desigualdad impuesta por los machos latinos. La gran potencialidad de este movimiento está en su carácter abiertamente plebeyo, popular, que lo vincula objetivamente a las luchas democráticas y anticapitalistas del proletariado; sus puntos débiles son el economicismo, el carácter secundario de las contradicciones sociales en que

se mueve, la capacidad del Estado para manipularlo mediante concesiones baratas, el aislamiento gremialista en relación con otros movimientos populares, sobre todo el obrero, su estacionalidad temporal, la inestabilidad de sus organizaciones y un cierto vanguardismo populista de las direcciones políticas más frecuentes.

El movimiento ecologista y el feminista –cuyas reivindicaciones materiales y políticas anidan también directamente en la relación naturaleza-sociedad y en los problemas urbanos– que han crecido más o menos significativamente en algunos países, se mantienen aún dominados por la pequeña burguesía democrática o reformista que no asume el carácter de clase de su lucha, que no identifica los orígenes sociales y económicos de los problemas a los que se enfrenta, que visualiza los problemas como defectos o desórdenes de la sociedad y no como la lógica inevitable y recurrente del desarrollo capitalista semicolonial y dependiente, que mantiene el pluriclasismo como principio organizativo y bandera ideal. Esta contradicción estallaría si la dinámica social y política pusiera en primer plano la transformación radical de la sociedad, pues con ella se cortaría ese pluriclasismo al diferenciar ideológica y políticamente a sus distintas clases integrantes.

Latinoamérica se encuentra en un momento crítico de su historia, jalada por procesos económicos, políticos e ideológicos contrapuestos y atravesados por profundas contradicciones próximas al punto de ruptura; el desenlace de la coyuntura actual marcará profundamente, por años, su porvenir y sobre todo el de sus masas trabajadoras.

REFERENCIAS

- Banco Mundial, "El crecimiento de las super ciudades" en *Horizontes Urbanos*, vol. 8, núm. 6, julio de 1984, Washington, D. C.
- Blitzer, Silvia y Hardoy, Jorge E., "La distribución espacial de los préstamos para los asentamientos humanos en América Latina" en *Revista interamericana de Planificación*, vol. XVII, núm. 45, marzo de 1983, Sociedad Mexicana de Planificación, México.
- Pradilla Cobos, E., *Mitos y realidades de los llamados movimientos sociales urbanos*, UAM-Xochimilco, México, 1981.
- Pradilla Cobos, E., (comp.), *Ensayos sobre el problema de la vivienda en América Latina*, UAM-Xochimilco, México, 1982.
- Pradilla Cobos, E., *Contribución a la crítica de la "Teoría Urbana"*, UAM-Xochimilco, México, 1985.
- Schteingart, Martha, "El sector inmobiliario y la vivienda en la crisis" en *Comercio Exterior*, vol. 34, núm. 8, México, agosto de 1984.